Ciudad de México, 14 de septiembre de 2018.

Versión estenográfica de la Sesión Pública de Resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, efectuada en el Salón de Pleno del propio organismo.

Magistrada Presidenta por ministerio de ley Gabriela Villafuerte Coello: Muy buenos días.

Da inicio la Sesión Pública de Resolución de esta Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocada para el 14 de septiembre del 2018, a las 09:19 de la mañana.

Subsecretario General de Acuerdos, por favor, podrías dar cuenta con los asuntos que tenemos listados para hoy y verificar el *quorum* legal.

Secretario General de Acuerdos en funciones Gustavo Amauri Hernández Haro: Con gusto, Magistrada Presidenta.

Están presentes las tres magistraturas que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada, en consecuencia, hay *quorum* para sesionar válidamente.

Le informo que en esta sesión pública serán objeto de análisis y resolución cuatro procedimientos especiales sancionadores de órgano central, así como siete de órgano distrital, lo que hace un total de 11 asuntos, cuyos datos de identificación se precisan en el aviso que se fijó en los estrados de este órgano jurisdiccional.

Es la cuenta para esta sesión, Magistrada Presidenta.

Magistrada Presidenta por ministerio de ley Gabriela Villafuerte Coello: Gustavo, muchísimas gracias.

Magistrada, Magistrado, está a su consideración el orden y si estamos de acuerdo lo podríamos votar en forma económica.

Tomamos nota, por favor. Muchas gracias.

Muy buenos días secretaria Carla Valencia Soto, puedes dar cuenta, por favor, con los asuntos que pone a consideración de este Pleno la Magistrada María del Carmen Carreón Castro.

Secretaria de Estudio y Cuenta Carla Valencia Soto: Claro, Magistrada. Con su autorización, Magistrada Presidenta, Magistrado, Magistrada.

Doy cuenta con dos resoluciones del Procedimiento Especial Sancionador de órgano central y cuatro de órgano distrital.

Doy cuenta con el Procedimiento Especial Sancionador de órgano central 219 de este año que emite en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior en la sentencia relativa al SUP-REP-667/2018 a fin de atender la denuncia que presentó el ciudadano José María Riobóo Martín en contra de Ricardo Anaya Cortés, entonces candidato a la Presidencia de la República postulado por la coalición “Por México al Frente” con motivo de diversas declaraciones que realizó durante el tercer debate presidencial y en actos posteriores que en su concepto lo calumniaron al vincularlo con actos de corrupción.

En el proyecto se propone tener actualizada la calumnia denunciada únicamente por cuanto hace a las expresiones que Ricardo Anaya Cortés pronunció durante el tercer debate presidencial celebrado el 12 de junio y en un acto de campaña celebrado en el Cerro de la Estrella el 19 de junio.

Ello, toda vez que la forma en que Ricardo Anaya Cortés relató los hechos relacionados con José María Riobóo Martín y su vinculación profesional con Andrés Manuel López Obrador fue con la finalidad de presentar una relación de corrupción entre dichas personas en torno a la adjudicación directa que Riobóo obtuvo para la construcción el segundo piso del Periférico del entonces Distrito Federal y su participación en la construcción del nuevo aeropuerto de la hoy Ciudad de México.

En ese sentido, en la propuesta se considera que la línea discursiva de Ricardo Anaya se encaminó a presentar a la ciudadanía que el hoy promovente gozaba de una preferencia del otrora Jefe de Gobierno del

Distrito Federal, para la adjudicación de obra pública, al sostener una relación ilegal basada en actos de corrupción.

Por ello, se concluye que se trata de propaganda calumniosa que lesiona el derecho fundamental al honor y a la reputación del promovente, mismos que son valores construidos con base en la percepción y buena fama de las personas, y que al verse afectados por la imputación maliciosa de actos vinculados con una trama de corrupción, sin un sustento fáctico o contextual es que se actualiza la infracción alegada, por tanto, se propone sancionar a Ricardo Anaya Cortés con una multa de 200 UMAS.

A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador de órgano central 269 del presente año, promovido por MORENA y otras personas físicas, mediante el cual denunciaron la realización de llamadas telefónicas de manera previa a la jornada electoral, las cuales desde su concepto podrían configurar expresiones calumniosas en contra del partido MORENA, de Andrés Manuel López Obrador, Nestora Salgado García y Napoleón Gómez Urrutia, entonces candidato a la Presidencia y al Senado de la República, respectivamente.

Además, se denunció que dichas llamadas también podrían actualizar las infracciones consistentes en falta de identificación de los emisores de los mensajes, y la presión o coacción al electorado.

En primer lugar, en el proyecto se precisa que el INE certificó el contenido de seis modelos de llamadas telefónicas, sin embargo, de la investigación implementada únicamente se pudo corroborar la autoría de dos de los modelos de llamadas, sin que se tenga indicios o elementos que permitan determinar quién o quiénes ordenaron o realizaron los otros cuatro. Y, por ende, la propuesta solamente se ocupa de analizar el contenido de aquellos cuya autoría se constató.

Precisado lo anterior, en el proyecto se propone declarar inexistentes las infracciones que les fueron atribuidas a los partidos políticos PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, PANAL, PES y PT, así como Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, entonces candidato presidencial, porque no se acreditó que hayan intervenido en la realización de las llamadas telefónicas

denunciadas, por lo que, en concepto de la ponencia, no se les puede atribuir responsabilidad alguna.

En cuanto a las personas morales que aceptaron haber realizado u ordenado la difusión vía telefónica de los modelos de mensajes pregrabados uno y dos, en el proyecto se explica que siguiendo el criterio recientemente sostenido por la Sala Superior al resolver el recurso de revisión del Procedimiento Especial Sancionador 143 de este año, en el que determinó quiénes pueden ser sujetos activos de la infracción de calumnia, se considera que las personas morales denunciadas no están expresamente contempladas dentro del catálogo de entes susceptibles de contener calumnia, ni en la Constitución Federal ni en la legislación secundario.

Aunado a que en el expediente tampoco se acreditó que las personas morales involucradas hayan actuado por cuenta o por instrucciones de algún partido político, candidatura, observador electoral o concesionarios de radio y televisión.

En este orden de ideas, existe un impedimento para que este órgano jurisdiccional analice la infracción mencionada.

Respecto a la infracción relacionada con la falta de identificación de los mensajes denunciados resulta inexistente, ya que ese requisito solamente resulta exigible a la propaganda electoral emitida por partidos políticos o coaliciones.

De tal manera que no se puede responsabilizar a determinados sujetos por conductas que no les son exigibles por la normativa electoral.

En cuanto a la presión o coacción al electorado, en el proyecto se precisa que las expresiones contenidas en las llamadas telefónicas no configuran esa licitud, porque aluden a una propuesta de amnistía presentada por el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, tema que, durante el desarrollo del proceso electoral, fue del conocimiento público y estuvieron inmersos en el debate político; aunado a que no hacen referencia, por ejemplo, a la desaparición o cancelación de programas sociales o a la supresión de derechos colectivos, de tal manera que pudiera presionarse o

coaccionarse a quienes recibieron las llamadas telefónicas para votar en contra de determinada fuerza política ante el temor de perder ciertos derechos o beneficios sociales, sino que se critica de manera severa una propuesta de campaña.

Finalmente, al haberse concluido en el proyecto que el contenido de las llamadas telefónicas presenta elementos que configuran propaganda electoral y atendiendo a que una de las infracciones por las cuales fueron emplazadas al Procedimiento Especial Sancionador las partes involucradas, fue la relativa a la prohibición de las personas morales de realizar aportaciones en especie a los partidos políticos, se propone dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que a derecho corresponda.

Ahora, doy cuenta con el Procedimiento de Órgano Distrital 205 de este año, promovido por el PRI y el PAN en contra de los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, que en su momento integraron la coalición “Juntos Haremos Historia”, derivado de la colocación de propaganda en un elemento de equipamiento urbano, específicamente en un puente peatonal, así como la omisión de incluir el símbolo internacional de reciclaje en su propaganda.

La ponencia propone determinar inexistente la infracción en la colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento denunciado, porque si bien se trata de propaganda electoral y está colocada en un puente peatonal, se configura equipamiento urbano, en la estructura en que se colocaron las lonas denunciadas corresponde en primer lugar a un espacio destinado expresamente para exhibir publicidad sobre el puente peatonal, en los términos de la concesión que se otorgó, y en segundo lugar porque no hay elemento alguno que permita si quiera presumir que dichas lonas obstruyeron o alteraran el libre tránsito de peatones que lo utilizan.

Por otro lado, en el proyecto se propone declarar existente la infracción consistente en la vulneración de las reglas de propaganda impresa, porque las lonas denunciadas no se elaboraron con material reciclable o biodegradable pues no contenían el símbolo internacional de reciclaje.

En ese sentido, se atribuye la responsabilidad al Partido Encuentro Social, ya que fue quien aportó los elementos para acreditar la contratación de propaganda y quien pagó por la colocación de la misma y por tanto, se le impone una amonestación pública.

Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador de órgano distrital 206, del año en curso, promovido por el Partido del Trabajo en contra de Janet Téllez Infante, otrora a candidata a diputada federal por el Distrito 07 Electoral Federal del estado de Hidalgo y MORENA, por la difusión de propaganda electoral que puede generar confusión en el electorado, así como por la supuesta sobre exposición de Andrés Manuel López Obrador en la propaganda denunciada.

En el proyecto que se somete a su consideración se propone declarar la existencia de la infracción referente a la propaganda denunciada, pues fue susceptible de generar confusión en el electorado, ya que indebidamente se incluyó tanto en la pinta de barda como en los volantes la referencia a una coalición electoral que no postuló a la entonces candidata diputada federal por el Distrito Electoral 07 en el estado de Hidalgo.

Lo anterior, ya que se podía generar una desinformación en la ciudadanía al pretender vincular una candidatura con una fuerza política diversa a la que en verdad la postula, lo cual podría implicar que se le asocie mayormente con la ideología, plataforma electoral o promesas de campaña de la coalición que no la postula, pero que tiene un mayor impacto entre la ciudadanía y no así con las propuestas del partido que la registró como candidata, por lo tanto, al tener por acreditada las infracciones atribuidas a Janet Téllez Infante como al partido MORENA, se propone imponer una sanción consistente en amonestación pública al considerarse adecuada y proporcional para el presente asunto.

Ahora bien, en lo concerniente a la sobreexposición del entonces candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia” la ponencia estima que no se actualiza la infracción, dado que contrario a lo manifestado por la promovente ni en la pinta de la barda ni en los volantes denunciados se utiliza el nombre, imagen o alguna referencia al entonces candidato presidencial.

Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución del Procedimiento Especial Sancionador 207 del año en curso promovido por el Partido Revolucionario Institucional y Gustavo Espinosa Velasco en contra de Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a Presidente de la República, así como a los partidos políticos MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

En el proyecto que se somete a su consideración se propone decretar la inexistencia de la infracción atribuida a los denunciados consistente en la indebida colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, ya que si bien se acreditó que las lonas fueron colocadas en dos puentes peatonales, lo cierto es que no se advierte que la propaganda denunciada hubiera alterado las características al grado que dañara la utilidad de los puentes peatonales o, en su caso, que hubiera constituido un elemento de riesgo para los ciudadanos, ya que la estructura en que fueron colocadas las lonas con la propaganda se encuentra en un puente, en una parte superior con una estructura de exhibición comercial destinada expresamente para el alojamiento, aplicación de publicidad.

De tal forma que el espacio destinado para exhibir propaganda no obstruye ni altera el tránsito sobre el puente peatonal.

Por lo anterior, la colocación de la citada propaganda no trasgrede la normativa electoral y, por ende, no se puede atribuir alguna responsabilidad a las partes denunciadas.

Por último, doy cuenta con el Procedimiento Especial Sancionador de órgano distrital 208 de este año promovido por el PRI en contra de Fortunato Rivera Castillo, otrora candidato a diputado federal postulado por el partido MORENA por la utilización de la imagen de menores en diversas publicaciones realizadas a través de Facebook.

Asimismo, denunció la presunta *culpa in vigilando* atribuible al referido partido político.

En el proyecto que se somete a su consideración se propone declarar existente la conducta por las siguientes razones:

De las constancias que obran en autos se acreditó que en la red social Facebook había un perfil de Fortunato Rivera y el otrora candidato reconoció su existencia y señaló que, si bien, él no lo maneja, el área de Comunicación Social de su equipo de campaña era la encargada de controlar y manejar la cuenta.

Además, que en esa página se publicaron fotografías de los recorridos que hizo como candidato a diputado federal.

Asimismo, se acreditó la publicación de 92 fotografías en las cuales aparecen diversos menores de edad durante los meses de abril, mayo y junio. En el proyecto se precisa que, si bien 20 fotografías los menores no son identificables, hay 72 imágenes en las cuales aparecieron 382 menores de los cuales 159 eran identificables.

En ese contexto, se propone declarar existente la infracción debido a que el candidato Fortunato Rivera Castillo no realizó ningún acto para cumplir con los requisitos mínimos establecidos por los lineamientos para poder exhibir a los menores en su página de Facebook, relacionada con su actividad proselitista en el marco del proceso electoral.

Aunado a lo anterior, se advierte que las fotografías fueron tomadas en comunidades donde las personas se encuentran en situación de vulnerabilidad por ser, en su mayoría, de comunidades indígenas, de tal manera que se afecta a los niños y niñas por ser menores, como por el contexto sociocultural en el que se encuentran, hecho que es conocido por el candidato denunciado, ya que fue él quien participó en los eventos donde fueron tomadas las fotografías y es visible en las mismas.

En tales consecuencias, dado que se acreditó que Fortunato Rivera Castillo, otrora candidato a Diputado Federal vulneró el interés superior de la niñez, ya que utilizó la imagen de menores sin cumplir con los requisitos previstos en los Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, y dado que la falta se calificó como grave ordinaria, se propone la imposición de una multa consistente en 500 UMAS.

Finalmente, por lo que hace a la responsabilidad del partido MORENA, se actualiza la *culpa in vigilando*, ya que tiene la responsabilidad de vigilar el actuar de sus militantes y candidatos, más aún cuando en algunas imágenes es visible el emblema del citado partido político, por lo tanto, se propone imponer una multa consistente en 200 UMAS. Es la cuenta, Magistrada Presidenta, magistrada, magistrado.

Magistrada Presidenta Gabriela Villafuerte Coello: Carla, muchísimas gracias.

Magistrada, magistrado, empezariamos con el análisis de los asuntos. En el caso del 219 del 2018, magistrada, magistrado, ¿algún?

Bueno, si se me permite, en este asunto votaré en contra, es un asunto en donde ya conforme a la cuenta que nos dio Carla se determina que sí existe calumnia en contra del actor por parte de quien fuera un candidato a la Presidencia de la República.

¿Por qué para mí no hay calumnia? Entiendo perfectamente, por supuesto, es una sentencia que se dicta en cumplimiento de una diversa de nuestra superioridad. La Sala Superior determinó revocar la decisión anterior que dictamos en esta Sala Especializada, me parece a mí que con efectos claros en el sentido de analizar el asunto a la luz integral de los actos, es decir, las alusiones que se hicieron por parte de Ricardo Anaya Cortés en el tercer debate presidencial.

La Sala Superior determinó revocar la sentencia en esencia porque lo único que hicimos en aquella ocasión, como se analizó el asunto, fue por las alusiones al tercer debate.

Sala Superior nos estableció que debíamos analizar no solamente eso, sino los actos posteriores, es decir, otras manifestaciones dadas por Ricardo Anaya Cortés en entrevistas de distintos cortes o actos de campaña que fueron retomados en medios de comunicación.

Esto fue lo que nos estableció Sala Superior, determinó que estos temas como estaban relacionados con los hechos que manifestó en principio José María Riobóo Martín como actos calumniosos en su integridad que los debíamos de revisar en su integridad y nos dijo la Sala Superior que hiciéramos esto en plenitud de jurisdicción en donde

podíamos reiterar la decisión o bien variarla; es decir, la plenitud de jurisdicción ese efecto tiene.

La Sala Superior nos orientó a valorar todo y actuar en plenitud de nuestra competencia, facultades y criterio.

Desde mi punto de vista esto me lleva a analizar las expresiones que se dieron en ese tercer debate presidencial en donde las entonces candidaturas se confrontaron, eso es un debate. Un debate es una confrontación de posiciones, ideas, críticas, por supuesto entre los contrincantes, que se dan en este marco de libertades sobre los temas, ese es un formato que tenemos conforme a nuestra normativa electoral previamente establecidos; es decir, los que se ponen o las personas que se ponen de acuerdo y los que se confrontan son las candidaturas.

En esta confrontación de posiciones por supuesto resultó aludido en forma específica quien hoy es el actor y en un tema que tuvo que ver específicamente en un tema en donde Ricardo Anaya Cortes, criticó la actuación o la conducción de quien también fuera en ese momento candidato a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, sobre un tema específico.

¿Cuáles? Son dos temas que tienen que ver con la obra pública, es decir, cuestionó en ese momento sobre la construcción de los segundos pisos y por lo que hace al nuevo aeropuerto que por cierto sigue en debate, de ahí su importancia, sigue en debate el aeropuerto y, bueno, creo que son temas que tienen que ver con asuntos que le interesa a la Ciudad, a la ciudadanía conocer.

Hago énfasis en esto porque se trata de temas que tienen que ver con inversión o recursos públicos, ambos, ambos escenarios, tanto los segundos pisos como el eventual construcción o no que sigue en vías de análisis, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues bien, esto fue en este debate se dijo sobre algunas participaciones de quien hoy es el actor y criticó y confrontó a su oponente.

En este tema me parece a mí que tengo también hacer alusión que cuando contestó o cuando se presentó la queja, efectivamente, hay un reconocimiento por parte del actor en la medida que él mismo

estableció sobre su participación en estas dos obras públicas, nos lo dijo en su contestación que por lo que hace a los segundo pisos se le otorgó un contrato vía asignación directa, es decir, cuando se hace la imputación de una asignación directa, la asignación directa es perfectamente legal, se prevé en las normas, es decir, no es un hecho, no es un delito falso.

Entonces, por empezar con la definición de lo que significa calumnia y si hay calumnia o no en este asunto, de manera que el actor reconoció que así fue y que está prevista en la ley, claro, por supuesto, y su participación fue completamente legal, definitivamente, eso sí.

Y en caso del nuevo Aeropuerto también nos dijo que participó en el procedimiento de licitación y las autoridades competentes en aquel entonces, porque estamos hablando de la época, de una época anterior de la administración de esta Ciudad de México, entonces Distrito Federal, determinaron que no continuaría y después presentó un estudio técnico con la finalidad de encontrar una solución alternativa del propio Aeropuerto.

Es decir, a lo que voy es que para los efectos de la calumnia no hay un hecho o un delito falso porque hay una participación en estos dos escenarios.

Ahora bien, en cuanto a la afectación a sus derechos como tercero, que también es parte de la imagen, de la honra y la reputación, tengo que hacer un énfasis en este momento, por supuesto que los señalamientos en principio, tengo que decir que se dan por eso hice referencia a lo que significa un debate, un debate están los candidatos en esa ocasión, porque ya nada más estaban candidatos hombres, están los candidatos y se confrontan entre sí.

Es decir, la alusión a la participación en eventos de corrupción o conflicto de intereses se da hacia el candidato.

Y, además, es una referencia, sí, directa y circunstancial hacia el actor, porque es parte del escenario o del relato o de la crítica que hizo en ese entonces una de las candidaturas.

Definitivamente las personas privadas están blindadas en su imagen, en sus derechos humanos, en su posibilidad y derecho que no se les invada en su esfera privada, eso es definitivo, es absoluto, las candidaturas, los partidos políticos deben respetar absolutamente todos los derechos de las personas en su ámbito privado, pero hay ocasiones en que esta tolerancia debe tener cierto margen por parte de las personas privadas, cierto margen de amplitud porque se proyectan a lo público.

Es decir, cuando sus actividades salen de su esfera privada y entran al ámbito público, por eso también reiteraré a qué se dirigieron las críticas y las alusiones del entonces candidato, se dirigieron hacia la actuación de José María Riobóo Martín en su ámbito de trabajo o con el sector público, dentro del sector público, porque ambos proyectos, tanto los segundos pisos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se pagaron o pagarían o involucran obra pública, recursos públicos.

Y esto me lleva, entonces, a confrontar esta situación con las determinaciones o lo que nos orienta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestra Sala Superior de este Tribunal Electoral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios, y al abordar distintos asuntos cuando se trata de la proyección o del respeto a la esfera privada, a los derechos privados y la libertades de expresión, nos dice en varias jurisprudencias y tesis -no me voy a ocupar de todas porque son criterios en distintos ramos, en distintas áreas-, pero creo que lo importante es en una, por ejemplo, por ejemplo, que tiene como título “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN”, es decir, la ciudadanía. Aquí tengo que también señalar que es la ciudadanía la que tiene el derecho a recibir toda la información y toda la transparencia cuando se involucren temas del orden público, obra pública, por ejemplo.

Y esta tesis dice: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA DEBE ESTAR VINCULADA CON LA CIRCUNSTANCIA QUE LE DA A UNA PERSONA PROYECCIÓN PÚBLICA PARA PODER SER CONSIDERADA COMO TAL”. Es decir, tenemos que verificar si hay en esas alusiones que hubieron en forma directa y/o circunstancial, si

hay relación o no con esa parte de la privacidad que le dio proyección pública a la persona. En este caso, claro, desde mi opinión, sí fue así.

Y dice la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no voy a leer toda la tesis: “Las personas con proyección pública deben admitir una disminución en la protección a su vida privada siempre y cuando la información difundida tenga alguna vinculación con la circunstancia que les da proyección pública o ellos la hayan difundido, esto es, si la información no versa sobre la actividad desarrollada por las personas en sus negocios o en sus actividades profesionales ni tiene vinculación con dichos aspectos, no es posible justificar un interés público en la misma. Al contrario, sí tiene vinculación con aspectos de un interés público, sí se justifica que se difunda información”.

Entonces, desde mi punto de vista a partir de estas tesis, ya no reiteraré más, están en lo que será seguramente mi voto particular al respecto, en eso hay varias tesis.

Pero también veo que la Sala Superior, un tema importante que también me parece destacable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar un amparo en revisión que tenía que ver con la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos hizo énfasis al analizar la exposición de motivos del artículo 108 de la Constitución, la importancia que la ciudadanía conozca siempre sobre los temas que tienen que ver con el recurso público, eso es un tema que la propia Suprema Corte de Justicia en este ejercicio de análisis constitucional de las normas cuando se le ponen a consideración hizo énfasis en la exposición de motivos del artículo 108 de la Constitución.

Para mí la proyección pública está clara, es una persona privada que debe ser respetada, sí, sin duda, pero en este caso en particular en el asunto que tenemos sometido al análisis de esta Sala estamos analizando la parte de su actividad empresarial dentro del sector público, a eso se centró la crítica.

También tengo que acudir a todos los criterios y, por supuesto, veo Sala Superior. En la Sala Superior en diversos asuntos en donde ha analizado la comunicación política, la comunicación entre candidaturas

en spots, pero bueno, es lo importante para mí es la referencia que hace la Sala Superior dijo y, voy a reiterar un asunto en particular, pero lo que me parece importante es el criterio, que la protección de la difusión de las actividades tiene un umbral distinto a la de las demás personas privadas respecto del ejercicio de la libertad de expresión en la que se cuestione su actuación en el contexto económico y social, por lo que, como ya venía argumentando, toda vez que la información se difunde en los medios y se trata de cuestiones vinculadas de manera directa con el ámbito público, es que se debe resistir o tolerar la crítica.

Hablaba la Sala Superior en este asunto y en algunos otros de la resistencia o la tolerancia que deben soportar las personas públicas siempre y cuando se trate o esté vinculada esa referencia a su desarrollo en el ámbito público —quiero enfatizar eso—.

Entonces, como en este caso la alusión directa se hizo en cuanto a su actividad, pero fueron los servicios profesionales que brindó o prestó dentro del sector público, es que, desde mi punto de vista, primero la calumnia no se actualiza porque efectivamente es cierto, es cierta la participación que hubo, a mí me parece que sí hay un escenario fáctico y contextual que permite hacer esta referencia y por lo que hace a su eventual daño como tercero, en este caso en particular, me parece que no existe.

Hemos en esta Sala Especializada dictado sentencias en donde analizamos un eventual daño a terceros, pero este asunto por las particularidades esenciales que tiene, que ya relaté, por supuesto, que están en el proyecto que nos dieron en la cuenta de Carla y en las partes que quiero destacar y por las cuales justifico mi posición diferenciada, es que a mí me parece que tenemos esta circunstancia.

Ahora, los actos posteriores, los actos posteriores son analizados, por supuesto que en la sentencia se hace referencia a todos los actos posteriores que se dieron después del tercer debate presidencial.

En estos actos posteriores que nos indica la Sala Superior que analicemos con plenitud de jurisdicción, efectivamente, ya no voy a reiterarlo, son entrevistas, son referencias dentro de los noticieros, entrevistas en Radio Fórmula, Noticieros Televisa, Milenio, El

Financiero y en todos ellos hay una constante, es la reiteración del propio discurso, comentarios o alusiones que hizo el entonces candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés en relación a la confrontación por las mismas razones.

Es decir, una crítica a una gestión administrativa anterior y hacer alusión directa o circunstancial hacia el actor sobre su participación en ambos proyectos de obra pública, tanto los segundos pisos como la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, razón por la cual, desde mi punto de vista, estas reiteraciones deben seguir la misma suerte de una consideración en cuanto se hizo o se vinculó su actividad no en la esfera privada, en la esfera que está blindada, sino cuando su actividad quedó inmersa en temas de orden público, de interés social, precisamente, por esa participación en la medida que él mismo reconoció desde la queja.

Entonces, aquí lo que tenemos es esa situación. Ahora, el propio actor nos ofreció y está en el expediente, pruebas, es decir, paquetes de notas periodísticas, tanto en el ámbito o en el mundo virtual, es decir, en periódicos digitales, en escenarios digitales o bien, en notas periodísticas de periódicos o de notas físicas, es decir, en donde se hace referencia a todo lo que sucedió en relación al debate, por supuesto, es una cobertura informativa de los medios de comunicación que, en ejercicio de su libertad periodística, retomaron o cubrieron aquél tercer debate.

Y entre los temas que cubrieron, por supuesto que está lo referente a este tema en específico como, sabemos la lógica de las coberturas informativas, como la circunstancia particular que hoy sin aislarla es la que ocupa nuestra atención.

Y encontramos pruebas de todo ello, pero esto es cantidad, sin duda, un sinnúmero de notas, un sinnúmero de notas, pero para mí el análisis de la calumnia o de una eventual afectación a la imagen y derechos e terceros, tiene que ver con la naturaleza del discurso, es decir, la calidad o la cualidad de las alusiones. Y en este caso, si el análisis o el punto de partida es lo que se dijo en específico, y desde mi punto de vista, por supuesto, no hay calumnia, por las razones que ya expuse, porque no hay un hecho falso. Y, por otro lado, las alusiones al actor son solamente y centradas a su trabajo o proyección

dentro del sector público, con interés en la ciudadanía de conocer esta información también, porque ya lo dije, me parece a mí que esto tiene que seguir también la misma suerte.

De esta manera, desde mi punto de vista, por supuesto desde la sentencia, porque eso sí no tengo la menor duda, en la sentencia se le da cumplimiento a la determinación de la Sala Superior en cuanto a analizar el cúmulo de actos y, por supuesto, pruebas, pero para mí tienen un alcance y un valor probatorio distinto.

Desde mi punto de vista, mi posición es lo que me orienta es en seguimiento y acatamiento de los distintos criterios de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral que en temas específicos de análisis del debate o de la confrontación o de la comunicación política en propaganda electoral o en distintos escenarios, nos ha orientado a analizar las alusiones a personas privadas, porque sucede, repito, lo hemos tenido aquí, pero se deben analizar los asuntos con sus particularidades esenciales.

Así es que por estas razones en mi opinión el cumplimiento de la sentencia de la Sala Superior, la violación en su caso, la inobservancia formal de falta de exhaustividad que determinó en nuestra sentencia anterior en esta ocasión nos ocupamos de la totalidad por supuesto, creo, de los actos impugnados, así como de la totalidad de las pruebas, pero me apartaría de la decisión o el proyecto que se nos plantea en el sentido de determinar que sí hay calumnia.

Para mí no existe por estas razones y no procedería sancionar a quien fuera candidato a la Presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés.

Ese sería mi comentario, Magistrada, en relación al proyecto que estamos analizando.

Magistrada, ¿algún comentario?

Por favor.

Magistrada María del Carmen Carreón Castro: Gracias, Magistrada.

Con el debido respeto me gustaría expresar las razones que me llevan a exponer el sentido de la propuesta que les hago en el caso de las declaraciones de Ricardo Anaya vinculadas con el ciudadano José María Riobóo Martín, en donde como bien ya lo ha expuesto la Magistrada Villafuerte, en el que se nos solicita realizar una serie de investigaciones y de analizar una serie de pruebas.

Y al momento de hacer la devolución estamos partiendo que se acreditan los hechos, se acredita que en diversas ocasiones Ricardo Anaya Cortés pronunció de manera pública una serie de cuestiones relacionadas con José María Riobóo Martín y su vinculación profesional con Andrés Manuel López Obrador, como bien lo sabemos, el ilícito que se analiza, en el presente caso, consiste en la supuesta difusión calumniosa, la cual está configurada en la Ley Electoral como la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.

A mi juicio, lo que se pretende salvaguardar con esta prohibición la cual se configura como un límite a la libertad de expresión que en un principio gozan los partidos políticos y los candidatos en la búsqueda de sus pretensiones electorales, son dos cosas: por una parte, el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz con la cual pueden construir una decisión informada y, en consecuencia, elegir de manera libre a la opción electoral que prefiera.

Por otra parte, también se resguardan los derechos fundamentales de las personas que se pudieran ver afectadas con la imputación maliciosa de situaciones falsas e incluso delictivas, tales como el derecho al honor y la reputación, que creo que es términos que cualquier ser humano buscamos que sean vigilados y que sean protegidos.

Así, la prohibición de propaganda calumniosa tiene una doble dimensión, pues protege tanto a la sociedad en general como a las personas que pudieran resultar afectadas con la circulación de afirmaciones falsas durante el debate público de las campañas electorales.

Ahora bien, como ya se dijo en la cuenta, en el presente caso tenemos que son cuatro las ocasiones en que Ricardo Anaya pronunció diversas cuestiones relacionadas con José María Riobóo, resulta fundamental contextualizar que la primera vez que el otrora a candidato presidencial se refirió de manera pública a este ciudadano, quien se dedica a hacer proyectos de obras civiles desde hace más de 25 años, fue en el tercer debate presidencial, en dicha ocasión Ricardo Anaya expuso ante la audiencia que José María Riobóo participó y perdió en la adjudicación de un contrato relacionado con el proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, además, que una vez que perdió se presentó con López Obrador en el sitio donde actualmente se construye para oponerse al proyecto y proponerlo en otro lugar.

Luego de ello, Ricardo Anaya afirmó en clara referencia a Riobóo que López Obrador tenía sus contratistas favoritos para después cuestionarle al ahora presidente electo que si cuando fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal le otorgó a José María Riobóo un contrato de 170 millones de pesos por asignación directa sin licitación y sin concurso, desde mi perspectiva, esta acción disuasiva llevada a cabo por Ricardo Anaya tuvo como intención el vincular de cara a la ciudadanía a José María Riobóo y Andrés Manuel López Obrador en una trama de corrupción, alegando de manera velada que las razones que explican y justifican que Riobóo haya optado por proponer la construcción del Aeropuerto en otra locación, así como que haya ganado un contrato de obra pública mientras López Obrador fue Jefe de Gobierno. Son, precisamente, actos de corrupción basados en un supuesto favoritismo hacia su persona.

En ese sentido, el hecho de que haya repetido lo esencial de estas declaraciones en un evento de campaña que celebró una semana después en el Cerro de la Estrella, evidencia que se trataba de una autentica estrategia, cuya finalidad era restarle adeptos a López Obrador, lo cual, en principio puede considerarse lícito; sin embargo, la ilicitud de tal conducta deviene en la forma en que Anaya planteó su discurso, puesto que planteó su estrategia en expresiones que pretendieron informar a la ciudadanía una supuesta relación de corrupción con José María Riobóo, que al final de cuentas se tradujo en una lesión al honor y reputación profesional del contratista.

Ahora bien, no paso por alto que los actos relacionados con la contratación de obra pública en los que participó el ahora denunciante son de pleno interés público, por lo que el debate público en torno a los mismos debe de protegerse, de forma amplia y robusta, privilegiando la circulación de ideas y puntos de vista.

Sin embargo, también encuentro que uno de los límites a dicho debate es la difusión de información falsa, pues de esta manera se blinda al intercambio de elementos que distorsionen las bases fácticas desde las cuales se puede construir ideas, formar opiniones y tomar decisiones.

Sobre este punto, considero que las declaraciones con fines electorales de Ricardo Anaya que buscaban vincular a José María Riobóo, son presupuestos actos de corrupción que generaron que se diera información que no tenía un sustento fáctico o contextual a la ciudadanía, ello toda vez que no tenemos un solo elemento que nos permita sostener que dentro del debate público se había cuestionado el desarrollo profesional del contratista y, mucho menos, que se le relacionara con tramas de corrupción, con algunos otros de los entonces candidatos presidenciales.

En ese sentido, considero que Anaya presentó de manera pública la supuesta relación de carácter ilícito entre Riobóo y López Obrador, como si se tratase de una descripción fidedigna de la realidad de las cosas, la cual es susceptible de calificarse como verdadera o falsa en la medida en que tenga correspondencia o no con la realidad.

Así, en tanto no hay prueba alguna de que los hechos que Ricardo Anaya imputó a José María Riobóo, tanto en el tercer debate presidencial como en el Cerro de la Estrella, hayan tenido como génesis una relación delictiva de corrupción, es que considero que deben calificarse sus declaraciones como propaganda calumniosa en perjuicio del ciudadano, mismas que generaron una afectación al honor y reputación profesional de un ciudadano.

En contraste con lo anterior, advierto que las declaraciones de este tenor que Ricardo Anaya pronunció en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga y ante medios de comunicación en la ciudad de

Guanajuato, no pueden considerarse como propaganda electoral, pues fueron producto de un ejercicio periodístico.

En efecto, a diferencia de las declaraciones libres y espontáneas que se dieron en el tercer debate presidencial y en el Cerro de la Estrella, las de estos actos fueron manifestaciones que se dieron como respuesta a preguntas expresas de las y los periodistas en relación con dicha temática.

Por lo que no advierto un ánimo unilateral, espontáneo y libre de generar un discurso propagandístico de carácter electoral, por ello siguiendo la jurisprudencia en torno a la protección de los actos vinculados con el periodismo que ha establecido la Sala Superior, así como los preceptos de este órgano jurisdiccional relacionados con esta clase de situaciones, considero que las declaraciones de Ricardo Anaya en estos contextos deben considerarse jurídicamente protegidas en virtud de ser un producto de la actividad periodística, por lo que no pueden reputarse como propaganda electoral a las que le sean aplicables las reglas de la calumnia.

Muchas gracias, Magistrada, muy amable.

Magistrada Presidenta por ministerio de Ley Gabriela Villafuerte Coello: Gracias, Magistrada.

Magistrado, ¿algún comentario? Perfecto.

Pasaríamos entonces al siguiente asunto que es el asunto central 269 del 2018. Magistrada, Magistrado, ¿algún comentario?

En este asunto también voy a votar en contra de la propuesta sobre inexistencia de violaciones en este asunto. Tiene interés este asunto porque es una dinámica que se dio, que se planteó en investigaciones con varias quejas que se dieron por diversos sectores, diversas quejas, tuvimos quejas por parte de MORENA, también con ciudadanía que se presentó a quejarse, es decir, fueron llamadas telefónicas que se recibieron en los domicilios, quizá, quienes estamos aquí o quienes nos escuchan o nos hacen favor de seguirnos, recibimos llamadas en nuestros domicilios de alusiones o bien con contenido político electoral de distintas clases.

En este caso, lo que se nos planteó fueron seis modelos, MORENA y las personas físicas que denunciaron, MORENA denunció al PAN, al PRI, pero bueno, no resultaron responsables o bien no se le pudieron atribuir las llamadas a los partidos políticos, sino a empresas en particular, pero eso iré un poquito más adelante.

Nos denunciaron seis modelos de llamadas. Durante la investigación que realizó la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se acreditaron dos modelos de llamadas. Me voy a permitir describirlas porque me parece importante o al menos trascendente para el sentido de mi postura diferenciada.

En el modelo 1 tenemos que quien descolgaba “Buenos días. Hablamos del Instituto Mexicano para la Democracia, nos encontramos realizando una encuesta, depende de preguntas para saber los perfiles de los candidatos que presentan diversos partidos políticos. MORENA tiene en su lista de candidatos a senadores plurinominales a Nestora Salgado, quien está siguiendo un proceso penal acusada de secuestro; también a Napoleón Gómez Urrutia, quien se encuentra prófugo de la justicia viviendo en Canadá, huyendo del delito de fraude en contra del Sindicato Minero. Si usted conocimiento, presione 1; si usted no tenía conocimiento, presione 2”.

Pregunta, considera usted que presentar candidatos con estos antecedentes demuestra la intención de López Obrador de declarar una amnistía que permita perdonar a delincuentes, secuestradores o narcotraficantes. Si usted está de acuerdo con esta afirmación, presione 1; si usted no está de acuerdo con esta afirmación, presione 2”.

¿Qué veo en este modelo que sí se acreditó? Solo tuvimos acreditados dos, por cierto, este fue por un total de un millón 181 mil 789 llamadas, el formato primero de Inteliphone, la empresa es Inteliphone Sociedad Anónima de Capital Variable.

¿Qué veo aquí? Efectivamente, hay una introducción y se habla de una encuesta, pero no solo por eso, hago énfasis, no solo, es una encuesta, no solo por eso creo que es la naturaleza de una encuesta sino porque a continuación hay propaganda a hacer alusión a la

situación particular de dos candidaturas del partido político en forma negativa, es propaganda, no tengo que llegar, como lo propone el proyecto, para determinar si hay calumnia o no, me voy a quedar en un paso antes, pero es propaganda.

Y a continuación, enseguida, se hacen preguntas, es decir, hay una interacción, hay una pregunta, se busca tener la opinión o la información de la ciudadanía que eventualmente respondió, porque seguramente quizá hubo mucha también, que colgó el teléfono, pero vemos ese tipo de interacción. Eso es una encuesta, el modelo dos que también se acreditó.

Hola, esta es de otra empresa, que en este caso fue TKM Customer Solutions y Focus Investigación, de esta se acreditaron 100 mil llamadas. Hola, le haremos una breve encuesta, si la elección fuera hoy, ¿por quién votaría para Presidente de México? Ricardo Anaya presione uno, Andrés Manuel López Obrador presiona dos, José y ya no se escucha, por otra opción.

¿Sabía usted de la propuesta de López Obrador de perdonar delincuentes y criminales si gana la Presidencia? Si sabía presione 1, ¿No sabía? Presione 2”. “¿Votaría usted por López Obrador ahora que conoce su propuesta? ¿Sí?, presione 1. ¿No?, presione 2”. Muchas gracias.

Esto también, esta segunda es una encuesta, es decir, desde mi punto de vista si en el modelo uno hay propaganda, en ambos modelos tenemos interacción, es una encuesta.

Eso me lleva a reflexionar la naturaleza, antes de verificar si hay calumnia o no, primero tengo que verificar desde mi punto de vista, por supuesto, si aquí tenemos encuestas y qué clases de encuestas hay y cuál es la razón de las encuestas en la materia político-electoral.

Por supuesto que las encuestas se dan en todo tipo de ámbitos, el comercial también es muy propicio, pero el desarrollo de las encuestas en nuestro país tiene antecedentes que se remontan específicamente a 1988 y de ahí se empezó a encontrar que había necesidad de reglamentarlas, de que entraran dentro del marco normativo de la materia político-electoral.

Hay un desenvolvimiento de esta necesidad ¿de generar qué? Certidumbre, certeza en la ciudadanía, no solamente en las encuestas en la realización, porque aquí la importancia que tiene es que hay ciudadanía que se ve parte activa en las encuestas, pero también las encuestas tienen una proyección hacia la ciudadanía que eventualmente conocerá de los resultados, porque una de las características de las encuestas, sondeos de opinión, es conocer qué tanto sabe o qué tanto está la ciudadanía involucrada o qué preferencias electorales tiene.

Así tenemos las distintas reformas que ha sufrido o ha tenido nuestra Constitución y las leyes reglamentarias, pero llegamos en forma específica, desde 1996 está previsto que el entonces Instituto Federal Electoral tendría que regular este tipo de ejercicios entre las candidaturas o, bien, de las empresas, para conocer las preferencias electorales.

Y, bueno, en la última reforma, me voy directamente a la última que son las normas que tenemos ahora vigentes, se reformó la Constitución y justamente en el artículo 41 de la Constitución se estableció que sería el INE quien tendría que llevar a cabo o dictar todos los lineamientos y las reglas específicas en materia, ya no sólo de encuestas, sino sondeos de opinión, encuestas de salida, todas estas dinámicas que se dan entre empresas, sí, partidos políticos o candidaturas para conocer el comportamiento de la ciudadanía en este ámbito.

De manera que desde mi punto de vista estamos en los dos modelos, por eso me permití ocupar su tiempo en hacerlos y decirles específicamente de qué se trataron estas llamadas telefónicas, son llamadas telefónicas que son encuestas telefónicas.

Entonces, eso me lleva a mí, antes de verificar, también hay una que tiene propaganda, antes de verificar el contenido, tengo que ver si estas encuestas cumplieron con qué, porque ya es una naturaleza jurídica, cumplieron con toda la serie de lineamientos que desde la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene prevista como orden y el Reglamento de Elecciones

del INE, si estas empresas, porque se acreditó la participación de dos empresas quienes manifestaron, claramente dijeron: "sí, realizamos".

¿La finalidad cuál fue? Es decir, no sólo porque desde mi punto de vista como juzgadora esta sea su naturaleza, las empresas dijeron que la finalidad de las llamadas tuvo su origen en una investigación de mercado, no tiene relación comercial con los partidos políticos y que brindan servicios de mercadotecnia, encuestas y tendencias; es decir, querían hacer un sondeo de opinión y que los números los eligieron con la base de datos del Plan Nacional del IFT. Interesante, tenían los datos de la ciudadanía.

Así es que no hay duda, no sólo por el análisis jurisdiccional que hago en esta parte, sino porque ellas mismas dijeron que hicieron un servicio de telemercadeo, está muy bien, sólo que en materia político-electoral se tienen que adecuar a todos los lineamientos que estrictamente emitió el Instituto Nacional Electoral.

Hay tres fases en la realización de encuestas, hay que manifestar la intención al Instituto Nacional Electoral y en donde se tienen que reunir y satisfacer, entre otros, todos los requerimientos científicos y metodológicos porque tiene que ver con preferencias electorales y con actividad democrática de nuestro país.

Entonces, para hacer una encuesta en materia político-electoral se tienen que reunir todos y satisfacer todos los requisitos, de manera que quizá la intención de estas empresas fuera positivo o loable, pero no estamos en una encuesta de otro tipo sino que es una encuesta que involucró temas político-electorales con preguntas explícitas en donde la ciudadanía, si quería, por supuesto, podía contestar las alternativas que se le presentaron.

De manera que en grandes rubros hay tres fases que tiene que ver con la intención, hay una fase previa, con la intención, hay una fase previa con la intención, la realización y la difusión de la encuesta.

No tengo dato en el expediente, no veo elementos que se haya publicado o difundido algún resultado de estas encuestas que se hicieron, pero eso no significa que en sede jurisdiccional pasemos por alto el análisis completo de una realización de una encuesta.

La importancia que tiene la materia político-electoral en este desarrollo de actividad de interrelación es porque la ciudadanía tiene que saber o cuando menos quedar clara que cuando hay una encuesta de por medio y se le hace un acto, esto es un acto de molestia, sin duda, que nos llamen a casa o a los teléfonos, es un acto de molestia, además de estar previsto por el artículo 41 de la Constitución, tiene que satisfacer el artículo 16 de la Constitución, todo acto de molestia tiene que estar fundado y motivado, no significa nada más que sean actos de autoridad, en este caso se satisface desde el momento que el Instituto Nacional Electoral conoce todos los aspectos de una metodología, el objetivo, marco muestral, diseño, método, cuestionario, es decir, que el INE tenga conocimiento absoluto y total de las encuestas y cómo se va a diseñar.

No tenemos en el expediente dato que estas empresas, porque no fueron los partidos políticos, fue una iniciativa de las empresas, reunieran todos estos cumplimientos, el cumplimiento y satisfacción de estos requisitos que se deben cumplir desde el orden constitucional, legal y reglamentario.

De esta manera, desde mi punto de vista, estas encuestas son ilegales, se realizaron al margen de la ley, no debieron realizarse porque no satisfacen los requisitos que están establecidos, deben estar reglamentadas por los parámetros que estableció o que se establecen en los lineamientos del Reglamento de Elecciones expedido por el Instituto Nacional Electoral.

Así es que, desde mi punto de vista, era analizar así el escenario de las llamadas telefónicas y como no cumplieron con las normas electorales lo procedente, desde mi punto de vista, era sancionar a Inteliphone, Sociedad Anónima de Capital Variable, TKM Customer Solutions, Sociedad Anónima de Capital Variable y Focus Investigación, Sociedad de Responsabilidad Limitada quienes de la investigación resultó que fueron quienes diseñaron e hicieron estas encuestas.

De manera con esta consecuente trasgresión, sin duda, desde mi punto de vista, al principio de certeza que debe regir los procesos electorales.

Ahora, por esa razón para mí no hay necesidad de ir más allá y analizar las expresiones de propaganda que se hicieron en uno de los modelos y solo en parte de ellos.

Porque, efectivamente, como lo dice el proyecto, en esa parte yo estaría de acuerdo, la Sala Superior en el recurso del Procedimiento Especial Sancionador 143 del 2018 nos dijo que las personas privadas no pueden calumniar cuando o cuando actúen por cuenta propia, independiente, salvo que haya una o coparticipación.

En este caso, por supuesto que no hay ninguna vinculación con partidos políticos por parte de las empresas. No obstante que sí hay una relación de otro tipo que no se puede vincular ahí. Yo tendría mis dudas si efectivamente no hay, sí hay o no vinculación porque hay una contratación realizada entre una de las empresas con el Partido Acción Nacional para cierta actuación. Pero yo tendría mis dudas y tendría que analizarlo quizá en una manera diferenciada a como se plantea en el proyecto.

Y sí, efectivamente eso dijo Sala Superior, pero no es una regla absoluta, sino que Sala Superior dijo que las personas privadas no pueden o no calumnian, porque no son los sujetos obligados por el artículo 41 constitucional, pero también dijo que podría sancionarse a los sujetos, pero también estableció que eventualmente las personas privadas que actúe en complicidad o coparticipación, estarían actuando como agentes de los primeros, es decir, como los realmente obligados.

Pero, bueno, en este caso, por las razones que acabo de exponer que me orientan a emitir voto diferenciado porque me quedo en el análisis, para mí es indispensable analizar la naturaleza de las llamadas, no solo tiene propaganda electoral, sí la tiene, una parte, la que hace alusión a dos candidaturas, pero la razón esencial es que son encuestas.

Ya si tuviera que analizar aquella llamada que sí tiene propaganda, tendría que quizá hacer un estudio diferenciado, porque tendría que ver si el indicio de esta relación entre una de las empresas y el Partido Acción Nacional me genera a mí alguna cuestión que me pudiera

plantear la posibilidad que sí están en el supuesto de excepción que en el propio recurso 143 la Sala Superior dijo que podría ser.

Es decir, en este asunto no es una regla general, es la premisa que admite excepciones, pero no, no tengo que llegar a ese punto, para mí basta con analizar que las encuestas, bueno, también tendría que decir si las encuestas, pero bueno, esa ya sería una opinión, bueno, las encuestas no solamente eran preguntas casuales, tenían cierta tendencia, porque poner propaganda y además cuestionar tienen aspectos que quizá son tendenciosos.

¿Pero esa facultad la tenía quién? Justamente el Instituto Nacional Electoral. Por eso el Instituto Nacional Electoral se le tenía que haber presentado la encuesta con toda su metodología para que el Instituto Nacional Electoral en uso de sus exclusivas facultades y en protección de la ciudadanía que recibiría, fuera activa o pasiva de esa encuesta, estuviera protegida. Pero eso sería una opinión.

Pero desde mi punto de vista ya al menos la que tiene propaganda, pues propaganda con preguntas enseguida, pues parecería que se orienta el sentido que se pretende encontrar.

Así es que para mí sí hay una infracción por parte de estas empresas y procedería, desde mi punto de vista, atribuirles responsabilidad a las empresas y sancionarlas sin duda por la realización de estas llamadas telefónicas en los términos que expliqué.

Magistrada, sería la posición en relación a este asunto.

¿Algún comentario?

Magistrada María del Carmen Carreón Castro: Sí, Magistrada.

Magistrada Presidenta por ministerio de Ley Gabriela Villafuerte Coello: Por favor.

Magistrada María del Carmen Carreón Castro: Muchas gracias. Sin duda es un asunto también interesante y que al conformar órganos colegiados versan diferentes puntos de vista y forma de analizar los asuntos.

Y en este caso contrario a lo que nos hace favor de expresar la Magistrada Villafuerte, considero que no se trata de una falta relacionada con la realización de encuestas, sino con la difusión de propaganda electoral calumniosa tal y como lo plantean los propios denunciantes.

Y por tanto su estudio debe circunscribirse al contenido de la propaganda. Hago énfasis en esta diferencia, dado que cuando esta Sala Especializada se ha dado a la tarea de analizar casos realizados con encuestas, lo que se pretende es evitar que se divulgue información falsa sobre las tendencias de las preferencias electorales que pudieran generar una percepción errónea en el electorado y, por ende, analizamos que esa información se haya obtenido cumpliendo con ciertos parámetros metodológicos; sin embargo, en este caso particular no se trata de la publicación o la realización de encuestas, sino de la difusión de propaganda electoral que pretendía restarle adeptos a un candidato y que en concepto de los quejosos rebasaba los límites permitidos al punto de llegar a ser propaganda calumniosa.

Por lo que mi propuesta se basa en el análisis de las conductas que cada uno de los escritos de queja contenía, sin que en ellos advierta que se haya denunciado como falta la realización de encuestas sin contar con el soporte documental relativo a los criterios de carácter científico para realizar este tipo de actividades.

En ese sentido, en este procedimiento no se podría analizar la falta que se plantea ya que al no ser parte de la controversia, en el planteamiento la autoridad encargada de la investigación llamó al procedimiento a las partes involucradas por la probable comisión de diversas conductas infractoras, sin que se hubiera contemplado la relativa a la realización de encuestas.

En este sentido, desde mi punto de vista no podríamos resolver un procedimiento especial sancionador con base en una conducta que no fue denunciada y respecto de la cual tampoco se defendieron las personas morales implicadas, porque de hacerlo se estaría variando la problemática sobre la cual se centró la investigación respecto de los hechos denunciados, situación que nos llevaría a la incongruencia externa de la resolución, puesto que se estaría resolviendo cuestiones

que no fueron planteadas por los quejosos, lo cual, recientemente la Sala Superior ya nos señaló que no podemos hacer en los procedimientos especiales sancionadores, puesto que ello implicaría una variación de la *litis* de los quejosos plantean en los procedimientos que se rigen primordialmente por el principio dispositivo.

Es por ello que nos acotamos a los hechos que fueron denunciados, en ese sentido se analizaron, puesto que existe la presunción de poder variar la *litis* y con relación a la interpretación del REP-143, en el cual analiza que las personas morales no pueden ser sujetos de cometer la calumnia porque no están contemplados dentro del catálogo de candidatos, partidos políticos, que puedan ser sujetos de análisis.

Entonces, es por ello que estaría presentando en este sentido la propuesta.

Es cuanto, Magistrada, gracias.

Magistrada Presidenta por ministerio de ley Gabriela Villafuerte Coello: Magistrado, ¿algún comentario?

Seguiríamos con los asuntos, si hay alguno les pediría que solamente me interrumpan, 205, 206, 207 y 208, ¿alguna cuestión? Es la lista.

En este último, bueno, yo acostumbro hacer un voto razonado en el tema de redes sociales, que tiene que ver con la posibilidad o no de analizar el tema en específico.

Si ya no hay ningún comentario en relación a este bloque.

Gustavo, por favor, tomamos la votación.

Secretario General de Acuerdos en funciones Gustavo Amauri Hernández Haro: Como lo instruye, Presidenta.

Magistrado en funciones Carlos Hernández Toledo: Nada más hacer un comentario en relación al PSD-208, si me lo permite.

Magistrada Presidenta por ministerio de ley Gabriela Villafuerte Coello: Ah, por favor, por favor.

Magistrado en funciones Carlos Hernández Toledo: Bueno, es breve.

Solamente llamar la atención que este órgano jurisdiccional ha emitido una serie de resoluciones que han sido confirmadas por Sala Superior y además Sala Superior también ha emitido una serie de criterios, digamos que han ido en relación a la protección del interés superior del menor cuando se utiliza su imagen en la propaganda político-electoral.

En este caso no quisiera que pasara desapercibido por el gran número de menores de cuya imagen se utilizó sin su consentimiento, sin la opinión del menor y sin el consentimiento de los padres.

Lo resalto porque, digamos, los partidos políticos no han terminado de tomar conciencia respecto de la obligación constitucional que tienen como entidades de interés público, incluso, y conforme a lo mandado por el artículo 1º constitucional de respetar, promover y, en todo caso, vigilar, digamos, el cumplimiento o, en todo caso, el debido ejercicio de los derechos humanos.

En este caso en particular, me llama la atención que el candidato denunciado subió una cantidad de imágenes importante en las redes sociales, donde los protagonistas de estas imágenes eran menores que, como se decía en la cuenta incluso, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad.

Entonces no quería pasar, dejar desapercibido, llamar la atención a los actores políticos, al denunciado en particular y al partido que lo postuló, para que se ajusten a la normativa electoral o a los criterios este Tribunal Electoral en el sentido de que se tomen en serio el interés superior del menor, el derecho a la imagen y a la privacidad de los menores, de los niños, niñas y adolescentes.

Y bueno, solamente resaltar que es un caso emblemático por su magnitud y que no quisiera que pasara desapercibido, evidentemente se está sancionando, creo que ameritaría una multa mayor pero se

razona en el proyecto, que dada su capacidad económica del candidato denunciado, no podemos poner una multa en un monto mayor, pero que sirva un poco esta intervención para hacer un llamado a los partidos políticos y candidatos, como decía, a que tomen en serio los criterios de este Tribunal Electoral.

Muchas gracias, magistrada.

Magistrada Presidenta por ministerio de ley Gabriela Villafuerte Coello: Gracias, magistrado.

¿Algún comentario?

Adelante, por favor.

Magistrada María del Carmen Carreón Castro: Muchísimas gracias, magistrado, por hacer la intervención con relación a este asunto en donde fue denunciado el hoy Diputado Fortunato Rivera Castillo, en donde en su página de internet, como bien lo comentaba el magistrado Carlos, realiza una serie de publicaciones donde se advierte la imagen de menores, con la calidad de indígenas, fotografiados con letreros, y de manera conclusiva se tiene que en 72 imágenes en total aparecieron 382 menores, de los cuales, 159 eran identificables y 223, pues bueno, no se podía identificar su rostro.

El ciudadano Fortunato Rivera Castillo no realizó ningún acto para cumplir con los requisitos mínimos establecidos por los lineamientos para poder exhibir a los menores en su página de Facebook relacionada con su actividad proselitista en el marco del proceso electoral.

Y en su caso, de no contar con los permisos, estaba obligado, aquí me sumo a la propuesta del Magistrado Carlos, si en dado caso no pueden tener el consentimiento de los menores, el consentimiento de los padres de familia o del tutor, porque puede ser el caso, están obligados a difuminar la imagen de los menores de edad.

Entonces, creo que esta Sala sí ha sido muy enfática en la protección del interés superior de los menores de edad con su vinculación a los

actos públicos que el día de mañana, en su caso, pudieran ser imputables a los menores.

Entonces, gracias, aquí estamos haciendo nuevamente este llamado a los partidos políticos y a los futuros candidatos, porque ya estamos también iniciando nuevamente proceso electoral.

Gracias, Magistrado, muy amable.

Magistrada Presidenta por ministerio de Ley Gabriela Villafuerte Coello: ¿Algún otro comentario?

Gustavo, tomamos la votación por favor.

Secretario General de Acuerdos en funciones Gustavo Amauri Hernández Haro: Con gusto, Magistrada.

Magistrada María del Carmen Carreón Castro, ponente en los asuntos de la cuenta.

Magistrada María del Carmen Carreón Castro: Son mi propuesta.

Secretario General de Acuerdos en funciones Gustavo Amauri Hernández Haro: Gracias, Magistrada.

Magistrado Carlos Hernández Toledo.

Magistrado en funciones Carlos Hernández Toledo: A favor.

Secretario General de Acuerdos en funciones Gustavo Amauri Hernández Haro: Gracias, Magistrado.

Magistrada Presidenta Gabriela Villafuerte Coello.

Magistrada Presidenta por ministerio de Ley Gabriela Villafuerte Coello: Gustavo, de acuerdo con todos, salvo en el caso del 219 central y 269 central, en ambos formularé voto particular en los términos de mis intervenciones previas.

Y por lo que hace al distrital 208 con un voto razonado por el tema de redes sociales.

Secretario General de Acuerdos en funciones Gustavo Amauri Hernández Haro: Claro que sí.

Magistrada Presidenta, le informo que los procedimientos sancionadores de órgano distrital 205, 206, 20 y 208, se aprobaron por unanimidad de votos, con la precisión de que usted anuncia la emisión del voto razonado en el PSD-208.

Por otra parte, los procedimientos de órgano central 219 y 269 de este año se aprobaron por mayoría de votos, dado que usted anuncia la emisión de votos particulares.

Magistrada Presidenta por ministerio de Ley Gabriela Villafuerte Coello: Muchísimas gracias, Gustavo.

En consecuencia, en el procedimiento de órgano central 219 del 2018 se resuelve:

Uno.- Es inexistente la infracción a la normativa electoral imputada a Ricardo Anaya Cortés en relación con las declaraciones efectuadas los días 13 y 16 de junio del 2018.

Dos.- Es existente la infracción atribuida a Ricardo Anaya Cortes, sobre difusión de propaganda calumniosa en contra de José María Riobóo Martín, por las declaraciones efectuadas durante el tercer debate presidencial y en un evento celebrado en Cerro de la Estrella, por lo que se le sanciona con una multa de 200 unidades de medida y actualización, equivalente a 16 mil 120 pesos.

Tres.- Se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, que en su oportunidad, haga de conocimiento de esta Sala Especializada la información relativa al pago de la multa.

Cuatro.- Notifíquese la presente resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para efectos de lo ordenado por dicha autoridad en el recurso 667 de este año.

En el procedimiento de órgano central 269, se resuelve:

Uno.- Son inexistentes las infracciones atribuidas a las personas morales Intelphone, Focus Investigación y TKM Customer Solutions, a los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, así como a Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, entonces candidato independiente a la presidencia de la República.

Dos.- Se dejan a salvo los derechos de MORENA para que los haga valer en la vía que estime pertinente.

Tres.- Dese vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en términos de lo razonado en la sentencia.

En el procedimiento de órgano distrital 205, se resuelve:

Uno.- Es inexistente la infracción sobre colocación de propaganda en elementos de equipamiento urbano, atribuida a los partidos: MORENA, del Trabajo y Encuentro Social que integraban la coalición.

Dos.- Es existente la infracción sobre vulneración de las normas de propaganda porque las lonas denunciadas no se fabricaron con materiales biodegradables pues no incluían el símbolo internacional de reciclaje por parte del Partido Encuentro Social.

Tres.- Se impone al Partido Encuentro Social una amonestación pública.

Cuatro.- Es inexistente la vulneración de las normas de propaganda impresa porque las lonas denunciadas no incluían el símbolo internacional de reciclaje por parte de los partidos políticos: MORENA y del Trabajo.

Cinco.- Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización para los efectos señalados en la resolución.

En el procedimiento de órgano distrital 206, se resuelve:

Uno.- Es existente la infracción atribuida a MORENA y a Jannet Téllez Infante, otrora candidata a diputada federal por el séptimo distrito electoral federal en Hidalgo y, en consecuencia, se les impone una amonestación pública como sanción.

Dos.- Es inexistente la infracción atribuida a MORENA y a Jannet Téllez Infante, otrora candidata a diputada federal por el séptimo distrito electoral en Hidalgo por la sobreexposición de la imagen de Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

En el de órgano distrital 207:

Único.- Es inexistente la infracción atribuida a Andrés Manuel López Obrador, quien fuera candidato a la Presidencia de la República, así como a los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conforme a las consideraciones de esta sentencia.

En el procedimiento de órgano distrital 208, se resuelve:

Uno.- Es existente la vulneración al interés superior de la niñez por parte del ciudadano Fortunato Rivera Castillo, por lo que se le impone una multa de 500 Unidades de Medida Equivalente a la cantidad de 40 mil 300 pesos.

Dos.- Es existente la falta al deber de cuidado por parte del partido político MORENA, por lo que se le impone una multa de 200 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 16 mil 120 pesos.

Tres.- Dese vista con copia certificada del expediente y de la sentencia a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

Cuatro.- Dese vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, en los términos precisados en la ejecutoria.

Cinco.- Se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral que en su oportunidad haga del

conocimiento a esta Sala Especializada la información relativa al pago de las multas.

Cabe precisar que en los asuntos en los que se impuso una sanción se deben publicar en la página de internet de esta Sala Especializada en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores.

Muy buenos días Secretaria Sandra Delgado Chapman, ¿puedes dar cuenta, por favor, con los asuntos que pongo a consideración de este Pleno?

Secretaria de Estudio y Cuenta Sandra Delgado Chapman: Con su autorización, Magistrada Presidenta, magistrada, magistrado. Doy cuenta con cinco proyectos de sentencia del procedimiento especial sancionador, dos de órgano central y tres de órgano distrital, todos de este año.

Comienzo con el 216 de órgano central que obedece al cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Superior en el recurso de revisión 664 y 670 acumulados. La queja se originó por la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional contra el gobernador de Hidalgo por un mensaje que publicó a través de un video en su cuenta de Facebook, mismo que también compartió y publicó la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación Pública estatal.

La consulta propone sobreseer el procedimiento por lo que hace al Secretario de Educación Pública de Hidalgo, al no existir elementos que revelen su participación o vínculo con los hechos y al no ser parte denunciada.

Por su contenido y difusión, se considera que el gobernador y el director jurídico inobservaron los principios de imparcialidad y neutralidad previstos en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, porque el gobernador de Hidalgo sostiene una postura contra una propuesta de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés e invita a reflexionar sobre esta, además que pagó por esa publicación, se desprende que tuvo la finalidad de influir en las preferencias electorales de la ciudadanía.

Por tanto, se propone comunicar al Congreso de Hidalgo por lo que respecta al gobernador, así como la Secretaría de Educación Pública por lo que hace al director jurídico de esta dependencia.

A continuación, me refiero al procedimiento 268, en el cual MORENA denunció a Felipe Ramírez Chávez, entonces presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Zacatecas y candidato a diputado local, por realizar tres publicaciones pagadas en Facebook durante el periodo de reflexión, así como a dicho instituto político por responsabilidad indirecta.

Se propone la inexistencia de la infracción atribuida a Felipe Ramírez Chávez y José Antonio Meade Kuribreña por lo siguiente:

Una publicación se llevó a cabo el 27 de junio, es decir, previo al periodo de reflexión, sin que pase desapercibido que se constató el 23 de agosto, lo cual obedeció a la naturaleza y operatividad de las redes sociales que permiten la permanencia de contenidos después de compartirlos, publicarlos o difundirlos, por tanto, esa publicidad está permitida y no constituye infracción a la normativa electoral.

Las dos publicaciones restantes, se llevaron a cabo el 1º de julio, pero de su contenido se desprende un mensaje de José Antonio Meade Kuribreña y el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en el que reconocieron que los resultados de la jornada electoral no les favorecían. Por tanto, no se trató de actos de campaña proselitistas o con el fin de obtener votos a favor o en contra de determinada candidatura o partido político.

Finalmente, al no acreditarse la infracción el PRI no es responsable indirecto.

Enseguida me refiero a los procedimientos especiales sancionadores de órgano distrital y comienzo con el 202. Con motivo de la queja del PRI en contra del PAN, así como de tres servidoras públicas, todas del estado de Veracruz, por la difusión de un video en la red social Facebook en el que manifiestan abiertamente su apoyo a Jesús Guzmán Avilés entonces candidato a diputado federal por el 02 Distrito Electoral de Tantoyuca, Veracruz, postulado por la coalición "Por

México al Frente”, lo que considera incumple con el principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos que establece el artículo 134 de la Constitución Federal.

La consulta propone declarar la inexistencia de la infracción.

Por lo que hace a Jesús Guzmán Avilés, entonces candidato a diputado federal, porque al momento de la presentación de la queja no era un servidor público, por lo que no le son aplicables los principios rectores del servicio público previstos en el artículo 134 de la Constitución.

Y por lo que hace a las servidoras públicas, porque el video alojado en Facebook por sí mismo si bien es un indicio, resulta insuficiente para acreditar la violación a los principios de imparcialidad y equidad al no contener circunstancias sobre cómo, cuándo y dónde se grabó, su finalidad ni quién lo publicó, máxime que las pruebas que aportó el promovente y las que recabó la autoridad instructora no robustecen.

Por otra parte, al advertirse que en el video aparece la imagen de diversos menores de edad y con la finalidad de proteger su interés superior, se propone solicitar a la Junta Distrital la apertura de un nuevo procedimiento especial sancionador, así como comunicar la sentencia a la Secretaría Ejecutiva del INE.

A continuación doy cuenta con el procedimiento 203, promovido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en contra del Partido Revolucionario Institucional por la pinta de propaganda electoral en bardas que forman parte de sus instalaciones.

Se acreditó la existencia de la propaganda electoral que aludía al partido político denunciado, así como a su entonces candidato a la Presidencia de la República, por lo que se propone calificar la falta como leve e imponer al Partido Revolucionario Institucional una amonestación pública.

Finalmente, me refiero al procedimiento 204 donde Ismael Caballero Hernández denunció la pinta de propaganda electoral en la barda de un edificio público.

En el proyecto se propone declarar existente la infracción, ya que de la investigación se acreditó que la barda del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la Ciudad de México se encontraba pintada con propaganda electoral del entonces candidato a Presidente de la República Ricardo Anaya Cortés y de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que integran la coalición “Por México al Frente”.

En consecuencia, se propone imponer a los partidos políticos una amonestación pública.

Es la cuenta, Magistradas, Magistrado.

Magistrada Presidenta por ministerio de ley Gabriela Villafuerte Coello: Muchísimas gracias, Sandra.

Magistrada, Magistrado, si hay algún comentario sobre los asuntos les pediría, igual, manifestarlo y si me interrumpen está bien.

Respecto del asunto central, los centrales 216, 268, el asunto distrital 202.

Por favor, Magistrada.

Magistrada María del Carmen Carreón Castro: Muchas gracias, Magistrada.

Es el asunto PSD-202 me estaría apartando del segundo punto resolutivo, es un asunto en donde se denunció que a partir del 22 de junio se difundió un video en la red social Facebook de nombre Jesús Por un Distrito Mejor del entonces candidato a diputado federal por el segundo distrito electoral de Tantoyuca, Veracruz, postulado por la coalición “Por México al Frente”.

En este asunto se denuncia tanto al entonces candidato como a las servidoras públicas Graciela Mahalet del Ángel Rodríguez, Yuridia Hernández Curiel y Velda Tonantzin, quienes incumplieron con el principio de imparcialidad y neutralidad que establece el artículo 134 constitucional al participar y publicar un video en donde expresan su

apoyo a Jesús Guzmán Avilés, entonces candidato a diputado federal, postulado por la coalición.

No sé si fuera posible el que pudiéramos ver el video de este asunto del PSD-202 para ver cómo participan estas servidoras públicas porque creo que es importante conocer la calidad de quienes participaron en el video que es Graciela Mahalet del Ángel Rodríguez, quien es responsable de la unidad del Centro de Salud Tantoyuca, tal y como lo manifestó mediante escrito de fecha 13 de agosto, Yune Yuridia Herrera Curiel es Directora del Colegio de Bachilleres del estado de Veracruz, como lo señaló en el escrito del 13 de agosto.

Velda Tonantzin Flores Alvarado es Subdirectora del Jardín de Niños licenciado Marco Antonio Muñoz, lo que afirmó también en escrito del 13 de agosto y aquí la autoridad instructora certificó la existencia de la página en Facebook.

Aquí las servidoras públicas en el momento de su participación y de su intervención, empiezan a hacer pronunciamientos destacando cuestiones personales y trayectoria del entonces candidato.

Entonces, creo que, desde mi punto de vista, sí, el video es un indicio de que estas servidoras públicas participaron en el mismo, aun y cuando ellas lo hayan negado, ellas, no hay una forma de vincularlas, o sea, en donde ellas dicen tener el cargo público, pero el no haber participado en ese video.

El mismo proyecto que nos pone a consideración nuestra Magistrada Presidenta, da vista al Secretario Ejecutivo en razón de que para allegarnos de mayores elementos y podernos pronunciar, porque como bien lo comentó la cuenta, hay participación de menores de edad, pero a la autoridad instructora se le olvidó porque este proyecto al momento de estarlo en proceso de instrucción, la ponencia tuvo a bien advertirlo y la ponencia a través del JE-100 del primero de agosto lo regresa para que se emplace y se hagan las observaciones y se hagan las investigaciones con relación a los menores de edad y al momento de regresarlo, pues no.

Es por ello que tiene a bien solicitar que se inicie un procedimiento oficioso para revisar si se centraban con los permisos para que los menores de edad pudieran aparecer.

Entonces, con el debido respeto a la ponente, con relación con este asunto, pues adelanto, como lo comenté, adelanto que disiento de la propuesta únicamente por lo que hace al punto resolutivo segundo en donde, pues no se logra vincular a las aún servidoras públicas, ya que, en mi opinión, sí existe una vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad de las tres servidoras públicas que fueron denunciadas. Para mí sí son responsables.

Mi motivo de disenso radica en que, desde mi apreciación, al realizar una valoración conjunta de pruebas indirectas se puede tener convicción de que las servidoras públicas participaron directamente en la grabación del video y que durante su intervención realizaron una serie de manifestaciones en torno a las gestiones públicas que había realizado el entonces candidato, a fin de vincularlas favorablemente con su postulación a un cargo federal, sin que haya algún elemento de prueba que nos permita suponer que su participación deriva de la edición de otros videos en los que hubieran aparecido dichas servidoras públicas y que indebidamente se hubieran incluido en la propaganda controvertida.

Yo creo que se confirma y se refuerza esta línea tan importante que tenemos los servidores públicos, que más allá de nuestras, o sea, claro que podemos tener alguna simpatía, alguna preferencia, pero esto no tiene que verse vinculado con nuestro servicio público. Ante todo, tenemos la calidad de servidores públicos y eso se queda en el interior, digo, somos servidores públicos 365 días del año, 24 horas, y el estar haciendo pronunciamientos a favor de alguien, bueno, esto vulnera la equidad en la contienda y para bien o para mal, al tener esa calidad de servidores públicos, puede llegar a influir.

Entonces, es por ello que me estaría yo separando del segundo punto resolutivo.

Muchas gracias, Magistrada.

Magistrada Presidenta por ministerio de ley Gabriela Villafuerte Coello: Muchas gracias, magistrada.

Magistrado, ¿algún comentario?

Sí, sin duda resulta interesante y acompañaría todo lo que nos acaba de exponer, magistrada, si tuviéramos realmente la posibilidad de vincularles. Pudiéramos pensar que son ellas, bueno, saben, tienen la calidad de servidoras públicas las personas en cuanto a su nombre y apellido dijeron que eran las servidoras públicas.

Lo que pasa es que hay particularidades en este asunto que nos hacen tener insuficiencia probatoria; ¿insuficiencia probatoria para qué? Para establecer una efectiva responsabilidad de ellas en esta participación, pues solamente tenemos la negativa de haber participado.

En el video que está en Facebook, en una red social, primero está en la página de quien fuera candidato, ahí está el video, no en una página de las tres servidoras públicas.

Ahora, establecer una identificación fisonómica, si es que pudiera ser ese el caso con los nombres de las personas que aparecen en el video y que efectivamente hacen alusiones positivas hacia quien fuera candidato, sin duda lo tenemos.

Pero aquí lo que tendríamos que establecer, claro, desde el punto de vista que se plantea en el proyecto, es que el vínculo entre la realización de los videos y las personas de estas tres servidoras públicas se dificulta en el asunto.

Por supuesto que ha sido criterio reiterado en un sinnúmero e infinidad de asuntos la posición de esta Sala Especializada del cuidado, la medida, los ejercicios de autoconstricción, las obligaciones que tenemos como servidores y servidoras públicas, de frente sobre todo en nuestro desempeño, no sólo nuestro, sino de todas y todos quienes participamos en el servicio público y, por supuesto, más allá de todo, en las contiendas electorales. Así lo dice el artículo 134 como un principio constitucional.

Pero también hay asuntos como éste, que la dificultad de establecer un vínculo cuando menos que efectivamente tenga cierta solidez para la vista que se da, porque nosotros en servicio público no sancionamos, damos vista; pero establecer esa vinculación cuando menos indiciaria, que ahí entiendo perfectamente son distintos puntos de vista la argumentación para establecer que son ellas, hacer esa argumentación es en donde al tratar de establecerla a partir de las pruebas y de las particularidades de ese asunto, no encontré argumentos sólidos que me permitieran cuando menos establecer en forma indiciaria esa vinculación de estas tres servidoras públicas con el video.

Nunca negaron ser servidoras públicas, por supuesto que no lo dijeron, pero ante su negativa, que se puede desvirtuar, por supuesto que se puede desvirtuar. Justo ahí fue la problemática que entendí o que encontré en el asunto que desvirtuar esta negativa junto con el escenario que acabo de describir, bueno, no pude plantear una propuesta en los términos que entiendo perfecto la posición de la Magistrada por lo que hace a la responsabilidad de los tres servidoras públicas, quizá si hubiera sido y con todo y el criterio que tenga sobre analizar redes sociales, si estas hubieran sido publicadas en alguna red social que tuviera una identificación nominativa con alguna de ellas, bueno, sería un indicio más allá, pero no fue así, así es que esta sería una justificación no adicional, sino la que se contiene en las razones que se plantearon en esta propuesta.

Magistrado, ¿algún otro comentario?

Si ya no hay algún otro sobre los asuntos, pediría entonces, Gustavo, que tomemos la votación, por favor.

Secretario General de Acuerdos en funciones Gustavo Amauri Hernández Haro: Magistrada, perdón, no sé si habría alguna intervención PSD-203 y 204.

Magistrada Presidenta por ministerio de ley Gabriela Villafuerte Coello: Pues creo que no, no sé si haya, ya no hay ninguna, acabo de preguntar si hubiera alguna, Gustavo, pero creo que no, ese fue el último.

Gracias, Gustavo.

Secretario General de Acuerdos en funciones Gustavo Amauri Hernández Haro: Magistrada, tomaría la votación.

Magistrada María del Carmen Carreón Castro.

Magistrada María del Carmen Carreón Castro: A favor de los procedimientos con excepción del distrital identificado con el numeral 202, en el que formularé un voto en contra, solo respecto del resolutivo segundo.

Secretario General de Acuerdos en funciones Gustavo Amauri Hernández Haro: Magistrado Carlos Hernández Toledo.

Magistrado en funciones Carlos Hernández Toledo: A favor.

Secretario General de Acuerdos en funciones Gustavo Amauri Hernández Haro: Magistrado Presidenta ponente de los asuntos de la cuenta.

Magistrada Presidenta por ministerio de ley Gabriela Villafuerte Coello: Son mi propuesta, Gustavo.

Secretario General de Acuerdos en funciones Gustavo Amauri Hernández Haro: Presidenta, le informo que los procedimientos sancionadores de órgano central 216 y 268, así como los de órgano distrital 203 y 204, fueron aprobados por unanimidad de votos.

El procedimiento de órgano distrital 202, fue aprobado por mayoría dado que la Magistrada María del Carmen Castro, anuncia la emisión de un voto particular en dicho asunto.

Magistrada Presidenta por ministerio de ley Gabriela Villafuerte Coello: Muchísimas gracias, Gustavo.

En consecuencia, en el procedimiento de órgano central 216, se resuelve:

Uno.- Se sobresee el procedimiento especial sancionador por el Secretario de Educación Pública de Hidalgo.

Dos.- El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses y el titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, usaron recursos públicos en forma indebida.

Tres.- Comuníquese esta sentencia al Congreso de Hidalgo y al titular de la Secretaría de Educación Pública de dicha entidad federativa.

Cuatro.- Comuníquese esta determinación a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el de órgano central 268 del 2018, se resuelve:

Único.- No se acredita la difusión de propaganda en Facebook durante el periodo de reflexión que se atribuyó a Felipe Ramírez Chávez, entonces presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Zacatecas y candidato a diputado local.

José Antonio Meade Kuribreña, entonces candidato a la Presidencia de la República y al Partido Revolucionario Institucional.

En el procedimiento de órgano distrital 202 del 2018, se resuelve:

Uno.- Es inexistente la violación al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal atribuida a Jesús Guzmán Avilés, porque al momento de la presentación de la queja no era servidor público.

Dos.- No se acredita la violación a los principios de equidad e imparcialidad que se atribuyen a Graciela Mahaleth del Ángel Rodríguez, Yuridia Herrera Curiel y Velda Tonantzin Flores Alvarado al no existir elementos probatorios.

Tres.- Es inexistente la falta al deber de cuidado de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

Cuatro.- Remítase a la segunda Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, copia certificada del expediente y la

sentencia para que inicie un nuevo Procedimiento Especial Sancionador por la posible vulneración al interés superior de la niñez.

Cinco.- Comuníquese esta sentencia a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

En el procedimiento de órgano distrital 203 del 2018, se resuelve:

Uno.- José Antonio Meade Kuribreña no es responsable por la pinta de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano.

Dos.- El Partido Revolucionario Institucional es responsable por la pinta de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, por lo que se le impone una amonestación pública.

Finalmente, en el de órgano distrital 204 del 2018, se resuelve:

Uno.- Ricardo Anaya Cortés no colocó propaganda electoral en un edificio público.

Dos.- Se acreditó que los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano pintaron propaganda electoral en un edificio público, por lo que se les impone una amonestación pública.

Cabe precisar que en los asuntos en los que se impuso una sanción se deben publicar en la página de internet de esta Sala Especializada en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores.

Magistrada, magistrado, agotamos el orden del día para el análisis y resolución de los asuntos que nos convocaron para esta mañana del 14 de septiembre a las 11:15 horas.

Muchísimas gracias y muy buenos días...

--oo0oo--